

licitó el recurso, las pruebas presentadas por los promoventes, las aducidas por el Ministerio Fiscal, así como los pedimentos de este. Vista la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, en la cual se concede el amparo á los quejosos, con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando: que la Gefatura política de Pachuca, al determinar con acuerdo del Consejo de Distrito, la suspension de los quejosos, en su calidad de Regidores del Ayuntamiento de esa ciudad, fundándose en la fraccion 10ª de la ley de 21 de Abril de 1868, expedida por el Congreso del Estado, se ha referido á las funciones públicas del cuerpo municipal. Considerando: que aún en el caso en que la determinacion de la Gefatura política no fuera conforme á las leyes del Estado, la responsabilidad que pudiera resultarle, no seria objeto de amparo; y considerando finalmente: que la óden de suspension, tal como se haya formulada en el acta del 4 de Enero de este año, y que sirve de apoyo á la queja, no importa violacion alguna de las garantías que otorgan los artículos 20 y 21 de la Carta fundamental de la República. Con tales fundamentos se declara: Primero: Que es de revocarse la sentencia del Juzgado de Distrito de Hidalgo, que concedió el amparo á los quejosos; y se decreta: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los ciudadanos Félix Vergara Lope, Mariano Navarro, Miguel Aveleyra, Tomás Hernandez, Jesus y José María Islas, Abraham Pastrana, Jesus D. Ozorno, y Jesus Arias, contra los procedimientos de la Gefatura Política de Pachuca, en virtud de los cuales fueron suspensos en el cargo de Regidores del Ayuntamiento de esa ciudad. Segundo: Devuélvanso sus actuaciones al Juzgado de Distrito de su origen con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Cor-

te Suprema de Justicia de los Estados- Unidos Mexicanos, y firmaron; firmando tambien el ciudadano Magistrado Castillo Velasco, quien dejó su voto en la forma prescrita por el Reglamento, antes de separarse con licencia de esta Suprema Corte.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Vicente Martinez, contra una providencia del Gefe Político de Coixtlahuaca que lo destinó al servicio militar en el ejército permanente.*

### PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El ciudadano Vicente Martinez de Coixtlahuaca, fué consignado por el Gefe Político de este Distrito, al servicio militar del ejército nacional, y por tal procedimiento ha ocurrido pidiendo amparo á la Justicia federal, alegando que han sido violadas en su persona las garantías que concede la Constitucion federal en sus artículos 5, 13, 20 y parte 2ª del 21. Alega tambien el interesado, que con tal acto se le han ocasionado perjuicios de consideracion, por cuanto, ademas de no ser efectivo que es pernicioso y de mala conducta, sostiene con su trabajo personal á una hija menor, á su mujer, su suegra, dos hermanas del mismo quejoso y su cuñada.

Este Ministerio para fundar su pedimento, se propone contestar los puntos en que apoya su pedido Vicente Martínez, demostrando al Juzgado, que todo su argumento no importa mas que un sofisma emanado de la libre interpretacion que le da á los artículos constitucionales que supone se han infringido al haberlo destinado al servicio del ejército.

No es cierto que en la persona del quejoso hayan sido violadas las garantías que concede el artículo 59 de la Constitucion citada. Demostraré, que en ninguna de sus partes está comprendido el caso de Martínez.

La primera parte de este artículo, manda, que nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin su consentimiento y sin la justa retribucion. A primera vista, parece que puede haber una juiciosa aplicacion al caso de que nos ocupamos, pues aunque el trabajo á que es destinado el querellante está justamente retribuido, falta su pleno consentimiento, cuando se vé, que se le ha impuesto este destino haciendo la autoridad uso de la fuerza, por ser contra la voluntad de aquel; pero es necesario fijarse, que falta aquí una circunstancia esencialísima, para que en rigor de derecho pudiera decirse que habia en ello una violacion de garantías constitucionales. A Vicente Martínez no se le ha obligado contra su voluntad á prestar un servicio personal, sino un servicio público; lo que este precepto ha querido, ha sido abolir los servicios personales gratuitos que siempre ha habido para los curas católicos y otras autoridades civiles, á que por fuerza de una antigua costumbre abusiva se observaba en la mayor parte de las poblaciones de la República. Si el artículo constitucional citado tuviera tan amplia inteligencia como la que quiere suponer el quejoso, se seguiria la desorganizacion de la sociedad; entonces ya no habria cargas conseyilas ni servicios municipales; las leyes orgánicas administrativas y ordenanzas del mismo ramo municipal, quedarian en su mayor parte sin vigor, y pe-

cando contra este precepto constitucional. Generalmente se vé, que el poder municipal, tan interesante á la sociedad, se compone de ciudadanos que sirven sin ninguna retribucion, viniendo á ser una carga obligatoria en obsequio del bienestar de una comunidad; y que las leyes orgánicas administrativas, previenen que estas cargas, no sean renunciabiles, sino en casos muy determinados, que han procurado restringir, en consideracion á que por las molestias que ocasionan á los particulares, estos empleos, y su ninguna recompensa, se banian muy frecuentes las excusas.

Un cargo de regidor ó agente de policía, generalmente se desempeña sin retribucion y sin voluntad. La ley marcando los determinados casos que dan derecho á la renuncia, impone la fuerza al ciudadano que sirve estos empleos, quien convencido de que no ha de ser admisible la solicitud de dimision que haga de su empleo, y temeroso de las penas que pueda sufrir, y el derecho señala á los negligentes y omisos, á su pesa, tiene que desempeñar este servicio, durante el tiempo que la ley determina. Hasta ahora, este Ministerio, no tiene conocimiento de que haya ocurrido un caso de amparo, promovido por un ciudadano destinado al servicio de una carga conseyil.

Los militares en servicio activo de la nacion, siguiendo la regla marcada en el párrafo anterior, bien claro queda demostrado, que su servicio no es personal, sino que lo hacen á la patria y á la sociedad que compone la República mexicana, protegiendo ó mas bien dicho, apoyando con su fuerza física, la soberanía é independencia, la paz y el orden público. Todos los individuos que componen una sociedad, por derecho están obligados á prestar este servicio; pero como no es posible que el activo desempeño de él recaiga en todos, la ley ha fijado sus excepciones para unos; á manera, de que mientras que aquellos vigilan tan sagrados intereses con el arma al brazo, por decirlo así, los otros, entregados á sus diferentes labores, con el producto de estas contribu-

yen al sostenimiento de la administracion pública. A la autoridad es á quien corresponde hacer estas calificaciones, y darle á cada ciudadano su destino, obligándolo á que sea útil á su patria de algun modo.

Si el artículo constitucional que nos ocupa se entendiera con la laxitud que pretende el interesado, las autoridades no podrían perseguir la vagancia y holgazanería: el holgazan y el vago, estarían entonces en el pleno goce de un derecho constitucional, y la justicia de la federacion de ampararlos, en el caso de que la autoridad competente, por pena de su falta, los destinase al servicio de la marina, del ejército ó al taller de un artesano para que aprendieran un oficio con que se proporcionasen un modo honesto de vivir; lo cual seria altamente inmoral.

Por el artículo 2º de la ley de 17 de Enero de 1870, el Gobierno General y el del Estado por este, quedaron autorizados para obligar á cualesquiera individuo, á prestar trabajos personales, mediante la justa retribucion. Parece que aquí el soberano, pretendió evitar en todo lo posible, que se dieran casos de amparo, cuando como en el caso presente, ocurriera el de ser destinado un ciudadano contra su voluntad, al servicio militar, por cuanto del texto expreso de la presente disposicion, se vé, que aun quiso evitar la duda que ocurre sobre la literal interpretacion que pueda darle cualquiera que tenga interos en aplicarlo de un modo favorable á su interos, considerando como personal, aun el servicio público, entendiendo, que la palabra "personal" debe aplicarse, no al servido, sino al que sirve.

Las otras dos partes del artículo 5º de la Constitucion federal, de que nos venimos ocupando, expresan, que la ley no puede autorizar ningun contrato que tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, por causa de trabajo, de educacion ó de voto religioso, ni los convenios en que el hombre padece su prescripcion ó su destierro. En estas dos partes, no es lógico decir que esté comprendido el caso de ser destinado un hom-

bre contra su voluntad al servicio del ejército nacional; pues no pierde la libertad; y aun cuando así fuera, no puede considerarse el sacrificio como irrevocable, supuesto que por diversas disposiciones está determinado, que los ciudadanos destinados al servicio activo del ejército, lo sean por determinado tiempo. Por el artículo 7º de la ley de sorteos de 26 de Enero de 1839, estaba prevenido, que el tiempo de servicio fuera el de seis años, cuya disposicion está en desuso, y pocas ó ningunas veces pudo observarse por las circunstancias anómalas que hemos venido atravesando, en virtud de las cuales, los gobiernos, en lugar de conceder retiros, habian recurrido al medio violento de la leva, para reemplazar las bajas del ejército, y aumentar la fuerza física, elemento esencialísimo, que antes de hoy, le ha venido dando respetabilidad á los Gobiernos. Por la suprema circular de 10 de Octubre de 1867, que es la vigente sobre el particular, se determinó, que el servicio de las armas en el ejército nacional, solo fuese obligatorio por cinco años, y que en lo sucesivo, tanto á los que hubiesen cumplido este período, como á los que lo fueren cumpliendo, se les expidiesen sus licencias absolutas, si así lo solicitaban.

No es aplicable de la misma manera que el artículo 5º el 13 y el 21 de la Constitucion federal, ni menos es cierto, que en la persona de Vicente Martinez se han violado las garantías que ellos otorgan: al quejoso, no se le ha juzgado ni castigado por delito de que halla sido acusado, ni menos la Gefatura política de Coixtlahuaca se ha erigido en tribunal para ejercer este acto. A Martinez se le ha considerado como pernicioso y á propósito para servir á la sociedad en la milicia activa del ejército nacional, y el Gobierno del Estado, facultado por el de la Nacion, ha sancionado este acto, satisfecho de que con ello, no se han seguido infracciones constitucionales.

Por las razones expuestas en el párrafo anterior, se infiere naturalmente, que aunque algunas veces se impone por vía de pe-

na á determinadas faltas el servicio militar, con respecto á los delitos propiamente tales, por derecho no se observa penar á los responsables con el servicio militar por mas ó menos tiempo: tal destino no se da á los ciudadanos por vía de castigo, sino que mas bien puede decirse, que se les hace fuerza para que cumplan una obligacion que es anexa á todos los individuos que componen una sociedad, y muy particularmente á todos aquellos que sin perjuicio de sus intereses y familia puedan hacerlo. En algunos casos, lejos de perjudicarse un ciudadano con destinarlo por fuerza al servicio de las armas, tanto á este como á la sociedad se les beneficia. Por esta causa y las anteriores, los vagos que no cometan un delito propiamente tal, sino simplemente una falta, se les destina al servicio de las armas, aun cuando sea contra su voluntad.

Por las circunstancias antes expresadas, y porque á Vicente Martinez no se le ha instruido un proceso como consecuencia de un delito de que halla sido acusado, carece de todo fundamento para decir, que el Gefe Político de Coixtlahuaca, violó en él la garantía del artículo 20 de la repetida Constitucion federal, en cuyo caso, no estaba obligada esta autoridad política, á hacerle saber el motivo de su prision, la persona que lo acusaba y todos los demas requisitos prevenidos en defensa de los procesados criminalmente.

Si Vicente Martinez, como alega, no es hombre de mala conducta, y sostiene con el producto de su trabajo personal á sus hijos menores, á su mujer, suegra y cuñada, y por esta causa el servicio militar lo perjudica tanto á él como á su familia, puede hacer su representacion al Gobierno general, solicitando su baja por las mismas razones, pues el amparo en el presente caso, como queda suficientemente demostrado, es improcedente, en virtud de que por el acto del ciudadano Gefe Político de Coixtlahuaca, no ha habido violacion de garantías individuales.

Por todo lo expuesto, este ministerio con-

cluye pidiendo al Juzgado, que no ampare á Vicente Martinez, contra el acto del Gefe Político de Coixtlahuaca, que lo destinó contra su voluntad al servicio militar en el ejército.

Oaxaca, Febrero once de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*S. Luenga.*

*Alegato de buena prueba del ciudadano Lic. José Isaac Cañas en favor del quejoso Vicente Martinez.*

C. Juez de Distrito:

Isaac Cañas, por Vicente Martinez, en el juicio de amparo que ante Vd. promovió por haber sido condenado al servicio militar en las tropas de la Federacion, en virtud de una providencia de la Gefatura Política de Coixtlahuaca; supuesto el estado del juicio referido, que es el de estar corriendo el término de seis dias, que para tomar apuntes y presentar sus informes por escrito, señala el artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, á las partes que en estos juicios de amparo litigan; procediendo á alegar del buen derecho de mi parte, como mejor proceda y fuera mas oportuno, digo: Que del informe que rindió el ciudadano Gefe Político de Coixtlahuaca, resulta la cortidumbre de los hechos siguientes:

1º Vicente Martinez fué condenado al servicio de las armas por ladron y pernicioso.

2º El mismo Vicente Martinez fué condenado al servicio dicho, no obstante haber pagado la contribucion que impuso una ley del Estado para procurar enganchados que sirvieran voluntariamente, exceptuando, á los que pagaran sus cuotas, del servicio forzoso.

El Ciudadano Gefe Político asegura, que Vicente Martinez pagó parte y no toda la cuota que le correspondia. Lo que hay de cierto es, que la pagó íntegra; sino que el Gefe Político de Coixtlahuaca, con di-

versos pretextos, eludió dar recibo de los últimos abonos, quizá por haber desde entonces concebido el proyecto de condenar á mi poderdante al servicio militar, procurándose así un pretexto que explotar. Acompañé á ésta exposicion el único documento que plugo dar al Gefe Político referido; haciendo la natural y sencilla observacion de que, si mi cliente tuvo intencion de gozar del beneficio de la ley que estableció la cuota, no se comprende por que motivo pagara parte de ella y no el todo; y si se creyó á cubierto de cualquier contratiempo aun no pagando, menos se comprende aún que hubiera gastado inútilmente su dinero satisfaciendo parte de esa cuota mencionada.

Sentados los hechos, véamos si hubo violacion de garantías en la persona de mi encomendado.

Comienzo por reconocer, que todo mexicano tiene obligacion de "defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos é intereses de su patria;" (Véase la fraccion 1ª del artículo 31 de la Constitucion de 1857) pero esa genérica obligacion está convertida, por lo que toca al servicio militar, en una prerogativa, tratándose del ciudadano: «Son prerogativas del ciudadano, dice el artículo 35, tomar las armas en el ejército ó en la guardia nacional, para la defenza de la República y de sus instituciones." Véase la fraccion 4ª.

Y sírvase Vd. observar, que la voz "Prerogativa," excluye toda idea de coaccion de parte de quien la obtiene, para obligarlo á usar de ella. Se compele y apremia, al que debe cumplir un compromiso, un contrato, una obligacion; pero seria la cosa mas extraña, que la autoridad viniera diciendo: «Tú tienes tal prerogativa, y yo te obligo por la fuerza á que uses de ella." Prerogativa, dice el Diccionario de la academia española, *es el privilegio, gracia ó exención* que se concede á uno para que goce de ella, anexo regularmente á alguna dignidad, empleo ó mérito.

El privilegio se concede para favorecer á quien lo obtiene, y cada cual puede usar ó

no usar libremente de la prerogativa que le es concedida.

Ni se me diga que el servicio voluntario en la milicia daria el resultado de que la Nacion no tendría ejército. Vd. sabe, ciudadano Juez, que la Inglaterra, acordes en esto sus constituciones con la prevencion citada, de la carta de 57, desde muy antiguo abolió el servicio militar forzoso, y cierto que jamas le han faltado ejércitos numerosos con que hacer frente á sus enemigos.

Por lo demas, el texto de nuestra Constitucion es claro. "Prerogativa" llama al servicio militar; y prerogativa es, sean cuales fueren las razones de los que pretendan ver mas lejos y mas claro que el Congreso Constituyente de 1857.

Una vez sentado que el servicio militar no es una carga forzosa impuesta al ciudadano mexicano, tiene de lleno aplicacion el artículo 59 de la Constitucion citada.

Nadie podrá ser obligado al servicio dicho, que es un trabajo personal, *sin su pleno consentimiento.*

He aquí la primera garantía violada en la persona de mi defendido Vicente Martínez. Sin su consentimiento, mas aún, contra su voluntad, se le obliga por el ciudadano Gefe Político de Coixtlahuaca á servir en la milicia federal, prestando servicios personales y compeliéndosele, no á cumplir con una obligacion, sino á usar de una prerogativa.

Pero supongamos ser cosa indubitada que cualquier ciudadano mexicano, solo por serlo, puede sin coto ni limitacion ser designado por un Gefe Político para el servicio militar. Aun así, ciudadano Juez, está patente en el caso la violacion de otras garantías. Si Vd. como se lo suplico, se sirve poner su respetable atencion, ciudadano Juez, en la notable diferencia que hay entre hacer cumplir á uno un deber, ó imponerle el cumplimiento de ese deber como una pena, ó como una medida preventiva, por declarársele *ladron y pernicioso.*

En primer lugar, es notorio que una declaratoria de esas lleva en sí misma im-

bíbita una pena mayor y mas trancedental que el servicio militar, es la pérdida de la honra, la difamacion.

Los Gefes Políticos ejercen hoy jurisdiccion contra los ladrones; (Ley de 13 de Abril de 1870, artículo 3º) y sus fallos producen respecto de estos delincuentes, los efectos de que habla una ley relativamente á la infamia, producida por una sentencia condenatoria; (Ley 5ª título 6º partida 7ª) de ahí es, que la providencia del Gefe Político de Coixtlahuaca, que condenó *por ladrón* á Vicente Martínez al servicio militar, envuelve necesariamente dos penas, la infamia proveniente de la declaratoria de ser robo de robo mi poderdante, y el servicio militar.

Ahora bien: el Gefe Político de Coixtlahuaca no pudo juzgar á Martínez, sino solo en el caso de que fuera saltador de caminos ó plagiarlo. Por robo en general, ni puede aplicarle la pena, ni es el Juez competente. (Véase el artículo 1º de la ley citada. La palabra "saltador," en el Diccionario de la Academia, y el artículo 23 de la Constitucion. La pena de muerte que establece la ley de 13 de Abril, no puede aplicarse segun el referido artículo 23, en clase de ladrones, mas que á los saltadores de caminos.)

El mismo Gefe Político parece reconocer en su informe, que no obró usando de la jurisdiccion que le atribuyo la ley de 13 de Abril de 1870. Mas bien dictó una providencia gubernativa, aplicando las órdenes que cita del Gobierno del Estado. Esas órdenes previenen, que á los perniciosos se les condene al servicio militar.

Resulta pues, ciudadano Juez, que un hombre ha sido declarado ladrón por una providencia gubernativa, y que se le hace prestar el honroso servicio militar, no porque tenga obligacion de hacer ese servicio en su calidad de mexicano; sino porque es un *criminal, un ladrón, un hombre perverso y pernicioso.*

No me detendré, ciudadano Juez, en fundar que las órdenes del Gobierno del Estado, que conceden facultades dictatoriales á

los Gefes Políticos para declarar culpados, ladrones y perniciosos á quien bien les plazca, sin pruebas, sin formacion de causa, sin formalidad ninguna, es un flagrante ataque á las garantías consignadas en los artículos 13, 19, 20 y 21 de la Constitucion; y que la pena, aunque fuera la mas benigna del mundo, aunque considerada bajo otro aspecto, no pudiera tenerse por un castigo, se impone infamatoriamente como tal pena, (artículo 21 de la Constitucion de 57. "La autoridad política ó administrativa solo podrá imponer como correccion, hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de prision, en los casos y modo que expresamente determine la ley.")

Las garantías constitucionales, no las puede suspender el Gobierno de un Estado.

Solo el Ejecutivo nacional, de acuerdo con el Congreso de la Union, ó en su recesso con la aprobacion de la Diputacion permanente, está constitucionalmente facultado para suspenderlas, (artículo 29 de la Constitucion de 1857.)

Por lo demas, ciudadano Juez, declarar presidio el ejército de la Union, surtirlo de ladrones y perniciosos, es hacer bien poco favor á la nacion mexicana.

Que se me muestre la ley en que la autoridad política, conforme ó no con el artículo 21 de la Constitucion de 57, puede imponer como correccion el servicio militar; pero que no se citen acuerdos del Gobierno del Estado, que ni son leyes, ni á nadie ha ocurrido darles ese nombre; y aunque lo fueran, violarian notoriamente las garantías del pacto fundamental.

Son consecuencias de lo expuesto:

1ª Que Vicente Martínez fué declarado ladrón por el Gefe Político de Coixtlahuaca, sin que procediera conforme á la ley de 13 de Abril de 1870, ni usara de las facultades allí concedidas á las autoridades políticas, sin averiguacion escrita, ni pruebas de ninguna clase.

2ª Que sin sujecion á ley ninguna, dictó arbitraria y dictatorialmente una simple providencia gubernativa,



3ª Que ha convertido en pena infamante (supuesto que la impone á los que eren ladrones) el honrosísimo servicio militar.

4ª Que ha declarado presidio ó casa de correccion al ejército mexicano.

Por último, Vicente Martínez pagó la cuota, ó ya que por la maliciosa negativa del ciudadano Gefe Político no es posible probar el total entero, una gran parte de ella.

Debia por lo menos el ciudadano Gefe Político, ya que lo condenó al servicio militar, haberle devuelto la parte de la suma recibida, cabalmente para que quedase exceptuado de ese servicio; siquiera para evitar hasta las apariencias de una operacion fraudulenta, que á un simple particular haria un poquísimo honor.

Visto que el Gefe Político de Coixtlahuaca no procedió conforme á la ley de 13 de Abril de 1870: que no impuso la pena allí señalada para los salteadores y plagiaros: que los hechos mismos, como vagamente se puede colegir, que se imputan á Martínez, no está justificado que lo constituyan plagiaro ó salteador de caminos: que el mismo Gefe Político confiesa haber procedido sin forma ni aparato de juicio, dictando una simple providencia gubernativa; parece fundada mi conclusion.

Ella no es otra, ciudadano Juez, sino que V., como se lo suplico, se sirva amparar á mi representado Vicente Martínez, segun solicitó en el escrito en que entabló el recurso de amparo. Protesto etc.—Oaxaca, Febrero 23 de 1871.—(Firmado).—*José Isaac Cañas.*

#### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Oaxaca, Marzo dos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio promovido por Vicente Martínez, del pueblo de Coixtlahuaca, solicitando amparo contra la providencia del ciudadano Gefe Político del mis-

mo lugar que sin formacion de juicio ni oírsele en defensa lo consignó al servicio del Ejército federal, por creer que intentó dar muerte á Valentin Perez, amagándolo con la arma que portaba. Visto igualmente el informe de la autoridad política respectiva, en el que manifiesta, que haciendo mérito de la conducta inmoral y viciosa del quejoso á quien la fama pública condena de salteador de caminos, por cuyo delito ha sido juzgado varias veces por su oficina, juzgado de partida y por las órdenes que ha recibido del Superior Gobierno del Estado, dictó la providencia de que se queja el espresado Martínez. Visto asimismo el pedimento del ciudadano Promotor fiscal, en el que pretende que no se ampare al quejoso contra el acto del ciudadano Gefe Político que lo destinó al servicio militar en el Ejército contra su voluntad. Considerando: que el espresado Martínez ha acompañado á su escrito de alegato el recibo de haber pagado la primera y segunda quincena de la contribucion que impone el decreto de 27 de Diciembre de 869 expedido por el Congreso de este Estado, para quedar exento del servicio de las armas en el Ejército federal: que la fraccion 4ª del artículo 35 de la Constitucion federal, considera como prerogativa de ciudadano, tomar las armas en el Ejército, de cuya franquicia solo puede usar el beneficiado por su voluntad: que atendiendo al espíritu de esta determinacion, no hay duda que el acto del ciudadano Gefe Político importa una violacion de las garantías consignadas en los artículos 49, 59 y fraccion 4ª del 35 del Código fundamental citado: que del informe del mismociudadano Gefe Político aparece, que al dictar su providencia, lo hizo de plano sin sujetarse á lo dispuesto en las cinco fracciones del artículo 20 de la Constitucion citada, ni menos se sujetó á la 9ª de la ley orgánica del Gobierno y administracion de este Estado de 16 de Noviembre de 57, que dispone, que los Gefes políticos al dictar una providencia formen expediente oyendo al quejoso y consignándolo al Juez

competente en caso que la falta importe un delito definido por la ley. Y en atención á que el ciudadano Gefe Político en vez de haber obrado conforme á sus atribuciones consignando á Vicente Martinez al Juez competente, por los delitos de robo de que hace mencion en su respectivo informe, lo consignó al servicio de las armas del Ejército, cuyo acto importa la violacion de las garantías que otorgan los artículos citados; y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion. La justicia federal declara: primero; que ampara y protege á Vicente Martinez contra la providencia del ciudadano Gefe Político del Distrito de Coixtlahuaca que lo consignó al Ejército en calidad de reemplazo: segundo, hágase saber, publíquese y remítase á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El ciudadano Juez de Distrito lo decretó y firmó: doy fé.—*Joaquín Marileon.—Juan Rey.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Marzo quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Oaxaca, por Vicente Martinez, quejándose de los procedimientos del ciudadano Gefe Político de Coixtlahuaca, en virtud de los cuales se le ha consignado como reemplazo al servicio de las armas en el ejército permanente: visto el informe de la autoridad contra quien se solicita el recurso, el parecer fiscal y la sentencia de primera instancia, que otorgó el amparo al quejoso, con todo lo demás que consta en autos y ver convino. Considerando: que los procedimientos del Gefe Político de Coixtlahuaca al consignar al servicio de las armas á Vicente Martinez importan una violacion de las garantías que á este respecto otorgan los artículos 20 y 21 de la Constitucion general de la

República. Con tales fundamentos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Oaxaca, que declaró, que la Justicia de la Union amparaba y protegia á Vicente Martinez, contra los actos de la Gofatnra política de Coixtlahuaca, que motivaron el presente Juicio.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito remitente, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron, por unanimidad de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogaszon.—Juan J. de la Garza.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Aza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Son copias. México, Marzo veinte de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa seguida ante el Juzgado primero de Distrito de esta capital, contra Tomás Guerrero, escribiente de la seccion 6ª del Ministerio de Hacienda, por suplantacion de una orden, abuso de confianza y conato de estafa al Erario nacional.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
DEL JUZGADO DE DISTRITO.

Ciudadano Juez:

El Promotor dice: que la presente causa se instruyó al ciudadano Tomás Guerrero, por haber remitido al Juzgado el ciudadano ministro de Hacienda, una orden que